

de acopios de piedra en grueso con destino á la reparación de los kilómetros 23 al 28 de la Sección de la carretera comprendida entre la Capital y la Playa de Ponce."

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Artículo 1º En la ejecución por contrata de dicho suministro registrarán además de las condiciones generales de 11 de Junio de 1886 y de las facultativas aprobadas por este Gobierno General en 6 del mes próximo pasado, las siguientes prescripciones administrativas y económicas.

Art. 2º El licitador á quien se hubiese adjudicado el referido suministro, tendrá quince días de término contados desde aquél en que se le notifique la aprobación del remate para constituir la fianza definitiva y formalizar la escritura de contrata, debiendo empezar el suministro á los veinte días á partir de la misma fecha, y terminarlo á los tres meses de empezado.

Art. 3º La fianza se compondrá de trescientos cincuenta pesos pudiendo formar parte de ella el depósito provisional consignado para tomar parte en la licitación, canjeando su carta de pago por otra que exprese que se destina aquél á este nuevo objeto.

Art. 4º El contratista tendrá derecho á que mensualmente se le pague el suministro que vaya ejecutando con arreglo á la certificación del Ingeniero.

Si desde la fecha de uno de estos documentos transcurriese mas de un mes sin verificarse el pago, desde fines de dicho mes se acreditará al contratista el uno por ciento mensual de la cantidad devengada que hubiese dejado de percibir.

Puerto - Rico, 2 de Setiembre de 1889. — Fernando Frago. [563] 3—3

Intendencia general de Hacienda pública

DE LA PROVINCIA DE PUERTO-RICO.

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 411 y con fecha 8 de Agosto próximo pasado, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real orden que sigue:

"Excmo. Sr.: — Con esta fecha se comunica por este Ministerio al de Marina la Real orden siguiente: — Excmo. Sr.: — Examinados los antecedentes recibidos en este Ministerio relativos al incidente promovido por el de su digno cargo con motivo de haber presentado determinadas dificultades el Interventor de la provincia marítima de Puerto-Rico, el Contador y el Interventor de Hacienda, para intervenir aquél y disponer éstos el abono de un libramiento expedido por el Ordenador del ramo, fundándose en que el importe del mismo comprende el sueldo del referido Ordenador, no consignado en presupuesto; vistas las Reales órdenes de ese Departamento Ministerial fecha 28 de Setiembre y 21 de Enero últimos; Resultando que por la primera de las citadas Reales órdenes V. E. se sirvió resolver que ningún funcionario pueda adoptar resoluciones mientras el Gobierno no determine lo que corresponda para cumplir los acuerdos del Parlamento; que no habiendo cesado en su cargo dicho Ordenador, no debió impugnarse por nadie el abono de los referidos haberes; extralimitándose por tanto los mencionados funcionarios en sus atribuciones, exagerando responsabilidades que no existían, puesto que no había variación interna en los detalles de los créditos de la exclusiva competencia del Ministerio, quien tiene Autoridad para sustituir un funcionario por otro dentro de la consignación del artículo. Resultando que la Real orden anterior fué comunicada á este Ministerio para que se recordase á las Oficinas de Hacienda de la Isla que en los ramos de Marina no tienen ni pueden tener otras atribuciones que las que señala el artículo 10 del Decreto de 12 de Setiembre y Reglamento de 4 de Octubre de 1870; Resultando que por la segunda de dichas Reales órdenes fecha 21 de Enero próximo pasado dispuso V. E. que en el próximo presupuesto se reclamase el crédito necesario para el personal administrativo de Marina, asignado en la actual plantilla de aquella Isla, autorizando la suspensión de los efectos de otra Real orden que disponía el Regreso á la Península del Ordenador que nos ocupa, cesando esta suspensión al faltar crédito en el capítulo 1º, artículo 1º, Sección 5ª del presupuesto para el pago de haberes de aquél funcionario; Resultando que en el expediente remitido por el Gobernador General con carta número 111 de fecha 6 de Marzo del corriente año pretendieron las Oficinas de Marina que se interviniera y autorizara el pago de un libramiento sin que al mismo se uniese justificante alguno, resistiendo á esta pretensión las de Hacienda y cuyos justificantes fueron presentados al fin, limitándose el Intendente general de Hacienda á someter su conducta á consulta de este Ministerio en razón á la disonancia que aparece existir entre las disposiciones de la Instrucción de 1870 y las del Reglamento de Marina de 1858 en que se fundan las Oficinas del ramo en contra de lo que hasta la presente han venido haciendo; Resultando que el Negocio correspondiente de la Dirección general de Hacienda de este Ministerio en su informe difiere por completo de la opinión del Departamento que tan dignamente dirige V. E. respecto al cumplimiento de los acuerdos de las Cortes, reformando los proyectos de ley de presupuestos, recordando co-

este motivo, que la Comisión del Congreso juzgó conveniente suprimir, considerándola sin duda innecesaria la plaza de Comisario Ordenador, reforma votada por las Cámaras después de amplia discusión y previa conformidad del Gobierno; atendiendo que una vez publicada la ley de presupuestos era indispensable cumplir y ejecutar el precepto; juzgando igualmente las demás doctrinas de la Real orden de 28 de Setiembre último aún cuando se alegue que no se trataba sino de variación interna en los detalles de un artículo, toda vez que las Oficinas de Hacienda tenían que cumplir el artículo 7º de la ley de 29 de Junio de 1888 el 31 del Decreto de Contabilidad de 1870 y los 171 al 173 de la Instrucción vigente, pues en otro caso hubieran incurrido en responsabilidad y reintegro á tenor de los artículos 14, 18 y 22 del citado Decreto entendiendo así mismo con respecto á la segunda Real orden ó sea la de 21 de Enero próximo pasado que no ha podido fundarse ni siquiera en el artículo 13 de la ley vigente de presupuestos toda vez que no resulta economía ninguna al restablecer una plaza que las Cortes no creyeron precisas; Considerando que es principio inconcuso en materia de contabilidad del Estado el de que el Gobierno no pueda suprimir ni modificar los recursos votados por el Parlamento, á no estar autorizado por una ley, así como tampoco dar otro empleo á los fondos públicos que el prescrito en la ley que lo determine, siendo también incuestionable que durante el ejercicio del presupuesto no pueden crearse mas obligaciones que las contenidas dentro del importe de los créditos legislativos, salvo circunstancias extraordinarias, hallándose así expresamente detallado por las leyes de contabilidad y de presupuestos vigentes, especialmente por el Decreto de 12 de Setiembre é Instrucción de 4 de Octubre de 1870 y por el artículo 7º de la ley de presupuestos de Puerto-Rico fecha 29 de Junio de 1888; considerando que mediante tales preceptos indudablemente la ley de presupuestos aprobada por las Cortes y debidamente sancionada por la Corona obliga á todos los Centros y Autoridades sin necesidad de otro requisito ó trámite que el de su promulgación siendo los Jefes de los Departamentos Ministeriales los primeramente obligados á cumplirla y á ajustarse estrictamente á todos sus preceptos, siendo por tanto inadmisibles de todo punto la doctrina sostenida acerca del particular por la Real orden del Ministerio de Marina origen del expediente: Considerando por otra parte que, las leyes de contabilidad, el citado artículo 7º de la ley de 29 de Junio y los artículos 171 á 173 de la mencionada Instrucción exigen responsabilidad personal á los Jefes de los diversos ramos ó á las Autoridades que dispongan la ejecución de los servicios no autorizados ó que excedan en su importe de lo que permita el crédito establecido y por los pagos que se ejecuten con infracción de lo dispuesto en la ley de presupuestos y así, habiendo acordado las Cortes al aprobar el presupuesto de referencia suprimir en el artículo 1º, capítulo 1º de la Sección 5ª la plaza de Comisario Ordenador, disponiendo que sus funciones pasaran al Contador de Navío de 1ª clase sin género alguno de duda el Interventor del ramo, el Contador y el Intendente de Hacienda obraron dentro de sus facultades ajustándose á su deber al negarse á intervenir y á disponer el pago del libramiento en que aparece el sueldo del Ordenador suprimido, cuyo sueldo no se consignaba en el presupuesto: Considerando que en todo caso las Oficinas de Hacienda deben atenderse rigurosamente á la estructura del presupuesto, y si el artículo correspondiente ofrecía créditos sobrantes para satisfacer dicho sueldo, éstos quedan en beneficio del Tesoro, ó se aplican previa las oportunas transferencias á otros capítulos, en donde haya sido insuficiente el crédito legislativo, sin que sea admisible aplicar los sobrantes que se presumen á la creación de obligaciones no presupuestas. En su consecuencia suprimida por el poder legislativo la plaza de Comisario Ordenador, no pudo ese Ministerio restablecerla durante el ejercicio del presupuesto como en realidad vino á hacerlo por la Real orden de 21 de Enero último, pues si bien el artículo 13 de la repetida ley de 29 de Junio autoriza al Gobierno para alterar la organización de los servicios, exige para esto que al efecto resulten economías, condición no observada en aquella alteración: Considerando que las Oficinas de Hacienda han obrado con acierto, exigiendo que las de Marina acompañen los libramientos con los justificantes necesarios supuesto que el artículo 19 de la Instrucción de Contabilidad de 1870 terminantemente lo previene así, y aún cuando dicha Instrucción se refiere en los libramientos de Guerra y Marina á las respectivas Ordenanzas é Instrucciones, el Reglamento de 2 de Enero de 1858 vigente en Marina no previene nada en contrario del referido precepto: y Considerando por último que no es procedente el recuerdo que el Ministerio de su digno cargo pretende se dirija á las Oficinas de Hacienda de Puerto-Rico, pues independiente de las facultades que el artículo 10 del Decreto de 1870 confiere á los Contadores generales para inspeccionar las Dependencias de Guerra y Marina, tanto las Autoridades de estos ramos como las de Hacienda han de abonarse á las disposiciones legales relativas á la práctica del presupuesto que se ha indicado, la Reina Regente del Reino en nombre de su Augusto Hijo el Rey (Q. D. G.) en atención á las razones expuestas, de conformidad con lo propuesto por la Dirección general de Hacienda de este Ministerio y de acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo de Estado en pleno, e ha servido disponer se signifique á V. E. que al

negarse las Oficinas de Hacienda de Puerto-Rico á intervenir y pagar el libramiento origen del expediente, obraron dentro de sus facultades y con arreglo á sus deberes, teniendo en cuenta su responsabilidad, sin que por ello merezcan el recuerdo que interesa ese Ministerio, considerando la medida adoptada por V. E. en Real orden de 21 de Enero último fuera de la autorización que concede el artículo 13 de la ley de presupuestos de la citada Isla á reserva de las responsabilidades que en su caso y lugar puedan ser exigibles á tenor de lo dispuesto en el artículo 7º de la ley de 29 de Junio de 1888 y preceptos concordantes, dignándose al propio tiempo aprobar la conducta seguida por aquellas Oficinas exigiendo de modo acertado que las de Marina acompañasen los libramientos con los necesarios justificantes por prevenirlo así terminantemente el artículo 19 de la Instrucción de contabilidad de 1870, siendo también la voluntad de S. M. se haga extensiva esta resolución á las Islas de Cuba y Filipinas, para que sirva de jurisprudencia en los casos de igual naturaleza que pudieran ocurrir y que se publique íntegra la presente Real orden en la Gaceta de Madrid y de las respectivas Islas. — Lo que de Real orden comunico á V. E. para su conocimiento y fines que correspondan. Y de la propia Real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y fines expresados."

Y acordado el cúmplase por S. E. con fecha de hoy se publica en la GACETA OFICIAL en cumplimiento de lo mandado.

Puerto-Rico, Setiembre 2 de 1889. — El Intendente general de Hacienda, U. Valdés. [881]

Real Audiencia de Puerto-Rico.

SECRETARÍA DE GOBIERNO.

En este día ha tomado posesión el Ilmo. Sr. Don Ricardo Diaz Agero del cargo de Presidente de la Audiencia territorial de esta Isla, para que ha sido nombrado por Real Decreto de 14 de Agosto próximo pasado.

Lo que por disposición de S. S. Ilma. se publica en la GACETA OFICIAL para general conocimiento.

Puerto-Rico, 6 de Setiembre de 1889. — Miguel Monreal.

El Ilmo. Sr. Presidente, por Decreto de esta fecha, ha nombrado Juez municipal de Luquillo á Don Oárlas Rola Otero.

Lo que por orden de S. S. Ilma. se publica en la GACETA OFICIAL para general conocimiento.

Puerto-Rico, Setiembre 4 de 1889. — El Secretario de gobierno, Miguel Monreal.

Administración General de Comunicaciones

DE PUERTO-RICO.

Agosto de 1889.

Cartas detenidas que no han podido entregarse por desconocerse los interesados.

Agosto Francisco
Aparicio Gabriela
Benites Manuel
Bentisca Teresa
Cabán Luisa
Delgado Elices
Dominguez Benigno
Gautier Maimond
Giordani José
García Laura
García Ramón
Lavandera Francisca
Lopez Ramtzz Francisco
Lugo Barbina
Montilla H
Milans Enrique
Moné Julián
Horsense Dumas
Pinto Manuel Juan
Pedro Domingo
Perez Melchor
Portugal José
Parra Olimpia
Ross Catalina
Rodriguez Carmen
Ramón Joaquín
Rosa Juan
Rosa Marcelino
Riano Rita
Reyes Nicasio
Ravera Toribio
Ramón Balbino Pedro
Sanchez Julia
Sanchez Laura
Serrano Francisco
Torres y Cruz Valentina
Zapata Francisca

Teógramas archivados por ser desconocidos ó ausentes los destinatarios.

De San Sebastián. — Josefa Jesús Delgado.

— Caguas. — Federico Mendez.

— Mayagüez. — Juan P. P. hotel San Juan.

— Juana Diaz. — Reinaldo Alvarez, idem Universo.

Puerto-Rico, Setiembre 4 de 1889. — El Jefe del 1.º Distrito, P. D., Antonio Diaz.